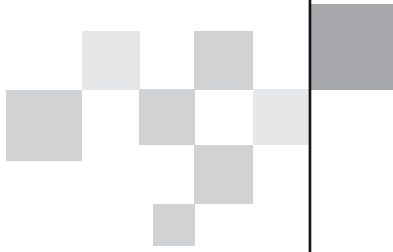


Cómplices del populismo de la mano dura: Los verdaderos desafíos del progresismo en la seguridad ciudadana

Eduardo Vergara Bolbarán

JUNIO 2019

- Los sectores progresistas han estado ausentes de las propuestas y soluciones para enfrentar el desafío de la seguridad. Su ausencia y silencio los ha transformado en cómplices del crecimiento del populismo de la mano dura. El progresismo ha sido incapaz de generar propuestas de seguridad que sean electoralmente atractivas, pero por sobre todo aplicables y eficientes en la práctica.
- Urge abordar los verdaderos desafíos del progresismo en seguridad ciudadana, abandonado una serie de tabúes, cálculos políticos y miedos que han impedido que no se generaran propuestas viables. En casos, no solo se ha imitado la obsesión por la mano dura, sino que se ha caído en el “buenismo” extremo que ha generado sensación de impunidad y fracturado el Estado de Derecho.
- Se sugieren cuatro principios básicos al momento de pensar o construir una política progresista de seguridad: la seguridad como el derecho a vivir seguros; la seguridad como corresponsabilidad y un bien público; la seguridad como garante del bienestar y la convivencia; y la oferta de alternativas al desarrollo.
- Prevención, control y reacción, rehabilitación y reinserción se presentan como pilares estructurales básicos para pensar y elaborar propuestas de política pública desde un enfoque progresista.
- La seguridad es una problemática demasiado relevante para quienes viven en Latinoamérica. Hablar de seguridad, es hablar de desigualdad. Esto ocurre no solo en la región más violenta, sino que una de las más desiguales.



Cómplices del populismo de la mano dura: Los verdaderos desafíos del progresismo en la seguridad ciudadana

Eduardo Vergara Bolbarán

JUNIO 2019



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

© Fundación Friedrich Ebert
Representación en México
Yautepec 55, Col. Condesa
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06140
Ciudad de México
Teléfono: +52 (55) 5553 5302
<http://www.fes-mexico.org>

 Fundación Friedrich Ebert-México

 @FESMex

 FES en México

Para solicitar publicaciones: fesmex@fesmex.org

ISBN: 978-607-8642-15-1

Primera Edición: Junio 2019

Impreso en México

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la FES está prohibido sin previa autorización escrita de la FES.



Índice

■ Introducción	3
■ Seguridad para pocos, inseguridad para muchos	3
El problema de la inseguridad y sus discursos	3
La (in)seguridad en Latinoamérica	5
Hablar de seguridad es hablar de desigualdad	6
La seguridad para las cosas sobre la seguridad para las personas: Internalizar ganancias y externalizar pérdidas	8
Cuando las explicaciones se transforman en excusas	10
El manejo del miedo y los medios de comunicación	10
■ Principios para una política progresista de seguridad que nos ayuden a pasar a la acción	11
El derecho a vivir seguros	12
La seguridad como corresponsabilidad y un bien público	12
La seguridad como garante del bienestar y la convivencia	12
Desarrollo alternativo	12
■ Pilares estructurales de una política de seguridad progresista para los tiempos actuales	13
■ Conceptos, ideas y acciones para avanzar en una agenda progresista de seguridad	14
El desafío no es solo técnico, sino que por sobre todo político	15
El Estado tiene la responsabilidad de proteger, pero no lo puede hacer solo	15
Transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en diseño, ejecución y control	15
El uso de la fuerza: Sin miedo, pero proporcional e inteligente	15
Impunidad, justicia y castigo proporcional	15



Recursos policiales donde generen mayor retorno social	16
Nueva forma de medir la seguridad	16
Enfoques: Género e infancia	16
Los más vulnerables son también víctimas	17
El sistema de seguridad debe ser conducido por civiles y no puede ser militarizado	17
Definir y nombrar con claridad al enemigo	17
Comunicar seguridad, no inseguridad	17
■ Una breve reflexión (política) final	18



Introducción

En el contexto actual, no existe una visión actualizada sobre lo que significa una política o al menos un enfoque progresista sobre la seguridad ciudadana. Los últimos intentos sistemáticos por abordar de lleno esta interrogante en Latinoamérica, tomaron lugar hasta el año 2007, principalmente gracias a la publicación de una serie de documentos y conversatorios que incluyeron a practicantes y académicos liderados por la Fundación Friedrich Ebert. Ya han pasado doce años.

Es por esto, que se hace pertinente articular una nueva reflexión con el objetivo de revisar y redefinir conceptos, ideas y lineamientos base para avanzar en la maduración y actualización del concepto de seguridad ciudadana desde una perspectiva progresista. La presente reflexión no intenta transformarse en un listado escrito sobre piedra, pero sí abrir debates mínimos y necesarios para pensar, diseñar, ejecutar y evaluar políticas de seguridad bajo un prisma progresista.

Mejorar la seguridad ciudadana debe ser un desafío presente en el corazón del progresismo.

Seguridad para pocos, inseguridad para muchos

Arrancaban de la inseguridad. Pero los cientos de niños, mujeres y hombres centroamericanos que iniciaron durante el 2018 una caravana hacia Estados Unidos, en búsqueda de libertad y mayor seguridad, en el camino se encontraron con lo contrario: La inseguridad no solo estará presente en sus países, sino que en gran parte de su trayecto y la región. Escapaban de la violencia extrema. Y como si fuera poco, al final del camino, se encontraron con una verdadera muralla que les impedía encontrar la libertad. Esta se transformó en una paradoja de cómo la inseguridad se ha transformado también en una forma de perder libertad.

Estas migraciones, causadas por la inseguridad, son una de las realidades más crudas que grafican el fracaso de las políticas de seguridad en gran parte de Latinoamérica.

De este fracaso, no solo son responsables quienes han diseñado y ejecutado la esencia de las políticas de seguridad, sino que también quienes, en muchos casos, las han replicado sin ofrecer alternativa alguna. Muchos liderazgos progresistas han sido parte de esto último y al no innovar, han mantenido un pasivo y cómplice silencio frente al populismo de la mano dura.

El problema de la inseguridad y sus discursos

La responsabilidad es compartida. Por un lado, los sectores más conservadores han construido realidad, discursos y promesas, ganado elecciones y gobernado en base a una aproximación a la seguridad basada en la mano dura y el miedo. Por otro, el progresismo y la centroizquierda en general, se han restado de estos debates, limitando su accionar a lo simbólico e incluso en casos, instalando sensaciones de impunidad que fracturan el Estado de Derecho. Se ha reaccionado mal y tarde a las propuestas y acciones ejecutadas por actores principalmente ligados a la “derecha”.

El progresismo ha demostrado tener un gran complejo con la seguridad. Como resultado de este complejo y la inacción mencionada, se ha puesto un foco desproporcionado sobre las evidentes causas y factores sociales que terminan gatillando la búsqueda de recursos e incluso la sobrevivencia a costa de cometer delitos, particularmente los que son catalogados como “contra la propiedad” y la participación en actividades ilícitas como el mercado de las drogas, la trata de personas, entre otras.

Si bien las causas son de gran relevancia, centrarse solo en éstas como estrategia política, ha nutrido un discurso comunicacional que resulta contra intuitivo para la ciudadanía, siendo visto por muchos como una forma de evadir el problema real o latente. Este enfoque ha terminado por impedir que se demuestre capacidad y liderazgo para ejercer el control y la persecución, incluso cuando es justificado y necesario.

Lo que ha sido para el progresismo prácticamente una política del silencio, se ha transformado en un



comportamiento pasivo que nos sitúa con grados de responsabilidad real sobre los escenarios existentes. Esto último cobra relevancia, ya que, a pesar de los esfuerzos de una serie de actores y organizaciones durante los últimos años, el panorama general habla de un ausentismo cómplice. Si bien la ciudadanía busca orden, seguridad y liderazgo, respondiendo de buena manera a quienes proponen dureza, el éxito de estos mensajes se debe en parte porque los sectores más progresistas han sido incapaces de generar propuestas de seguridad que sean electoralmente atractivas, pero por sobre todo aplicables y eficientes en la práctica.

Es más, como consecuencia de este vacío, incluso los mismos actores políticos progresistas terminan, de igual forma, cayendo en los mismos discursos de mano dura, maquillando levemente las propuestas y en algunos casos, simplemente abandonando el debate técnico sobre seguridad. En consecuencia, el progresismo y la centroizquierda en general, le han entregado en bandeja el monopolio de la seguridad a los más conservadores. Se ha jugado en una cancha ajena, con reglas impuestas y en condiciones de desventaja. En este escenario, las derrotas no solo han sido predecibles, sino que inevitables.

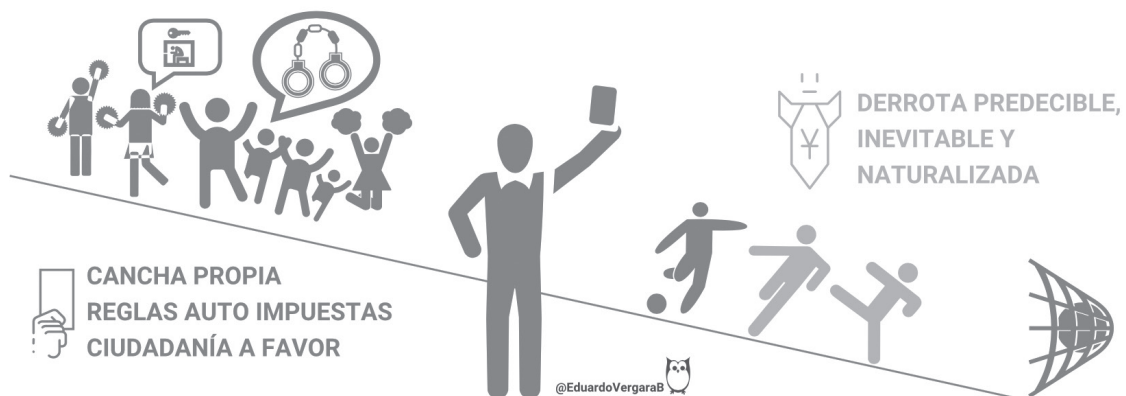
Esta constatación no explica del todo el éxito en aprobación y retorno electoral de las políticas de

mano dura. Un factor esencial en su éxito, es que estas propuestas y acciones generan en la población una sensación de que “se está haciendo algo”, que los gobiernos por medio de las “batallas”, “guerras” o “combates” contra la delincuencia, están usando todos los recursos disponibles para lograr comunidades más seguras. Esta es, sin duda, una estrategia que, manteniendo grados de miedo en la población, causa empatía y complicidad, ya que, de igual manera a como se tratan los temas de relaciones internacionales, soberanía o incluso conflictos armados, resulta natural ponerse tras el liderazgo político sin mayor ánimo de cuestionamiento.

Este escenario se fortalece, ya que las políticas de mano dura han demostrado ser altamente atractivas en períodos electorales y eficientes como mecanismo para mantener el apoyo popular una vez en el poder. Uno de los ejemplos más recientes tomó lugar en la última elección presidencial de Brasil, donde el entonces candidato y hoy presidente, Jair Bolsonaro, llevó la retórica del mensaje político sobre seguridad al extremo. Pero si bien la estrategia de Bolsonaro fue algo predecible, nos encontramos también con discursos menos esperados por parte de actores de izquierda. Un ejemplo es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, quien ha despertado una serie de dudas en sectores particulares respecto a la implementación de

Gráfico 1

La cancha de la seguridad ciudadana



Fuente: Gráfico de elaboración propia.



ciertas políticas de seguridad con propuestas como la Guardia Nacional. Propuestas que, dicho sea de paso, para muchos no dialogan con su visión sobre la sociedad.

Usando estos dos ejemplos como punto de partida, al menos políticamente ubicados en lugares opuestos, y siendo además los dos países más grandes de Latinoamérica, debemos recordar cómo, en prácticamente toda la región, e independiente del sector político, candidatos presidenciales, municipales y al parlamento, han usado y abusado de las propuestas de mano dura como un atajo al poder. Sin embargo, por otro, si bien las ideas que sustentan las visiones sobre la seguridad ciudadana pueden estar en perfecto alineamiento con el pensamiento progresista, al ser llevadas a la práctica vuelven a la matriz única del orden y el castigo como pilar estructural del enfoque aplicado. A pesar de las diferencias, las propuestas “duras” en seguridad ciudadana se han transformado en el eje de gobernabilidad que sirve de pilar para los discursos y acciones de diversos gobiernos.

Sin embargo, estas políticas poco o nada han logrado cuando se trata de generar mayor seguridad en el mediano y largo plazo. Es más, la evidencia nos muestra que, en la gran mayoría de los casos, se ha generado más violencia, mayor desconfianza hacia instituciones como las policías e incluso aumentos en la actividad delictual.

Pero independiente de la evidencia sobre su ineffectividad, en algunos casos, pareciera que ciertos grados de inseguridad en la población resultan altamente convenientes para ciertos sectores políticos. Mantener este estado permite un amplio y efectivo despliegue de nuevas propuestas y soluciones parche que generan alto impacto mediático y grados relevantes de aprobación en la opinión pública.

La (in)seguridad en Latinoamérica

Latinoamérica cuenta con los países, regiones y ciudades más violentas del planeta. La región, es, además, por sí sola, la más violenta. De acuerdo al más reciente balance del Instituto Igarapé, mientras que la tasa de homicidios en la región es de

21,5 por cada 100.000 habitantes, la tasa global se sitúa solo en 7 por cada 100.000. Uno de cada cuatro asesinatos en el mundo ocurre en el grupo de países compuestos por Brasil, México, Venezuela y Colombia. Además, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio a nivel mundial se encuentran en nuestra región. Como si fuera poco, ONU Mujeres estimó que la región es el lugar más letal para las mujeres fuera de una zona de guerra.¹ Solo en México, durante el año 2017 murieron asesinadas nueve mujeres al día y de los 3.430 casos anuales solo 760 fueron investigados como feminicidio.

Sin embargo, la realidad delictual es bastante diversa entre países. Y es aquí donde nacen grandes interrogantes respecto a la brecha entre vivir seguros y sentirse seguros. De manera transversal debemos destacar cómo en gran parte de los países reinan altos grados de sensación de temor. El caso chileno es tal vez el más evidente, ya que, un país donde la actividad delictual, particularmente en lo que respecta a homicidios, es de las más bajas de Latinoamérica y se observa una victimización de solo el 27% en delitos de alto impacto (o mayor connotación social), goza de los más altos índices de temor.

De acuerdo a la última medición de la encuesta ENUSC del Ministerio del Interior (2017), el 39,7% de las personas creen que serán víctimas de un delito en los próximos 12 meses y el 85% de las personas perciben que la delincuencia ha aumentado. De acuerdo a Latinobarómetro,² con un 28%, Honduras es el país donde hay menos personas que no tienen temor, sin embargo, es Chile donde esta cifra es la menor llegando solo al 7%. Esta es una relación prácticamente inversa cuando miramos homicidios y actividad delictual (ver gráfico 2).

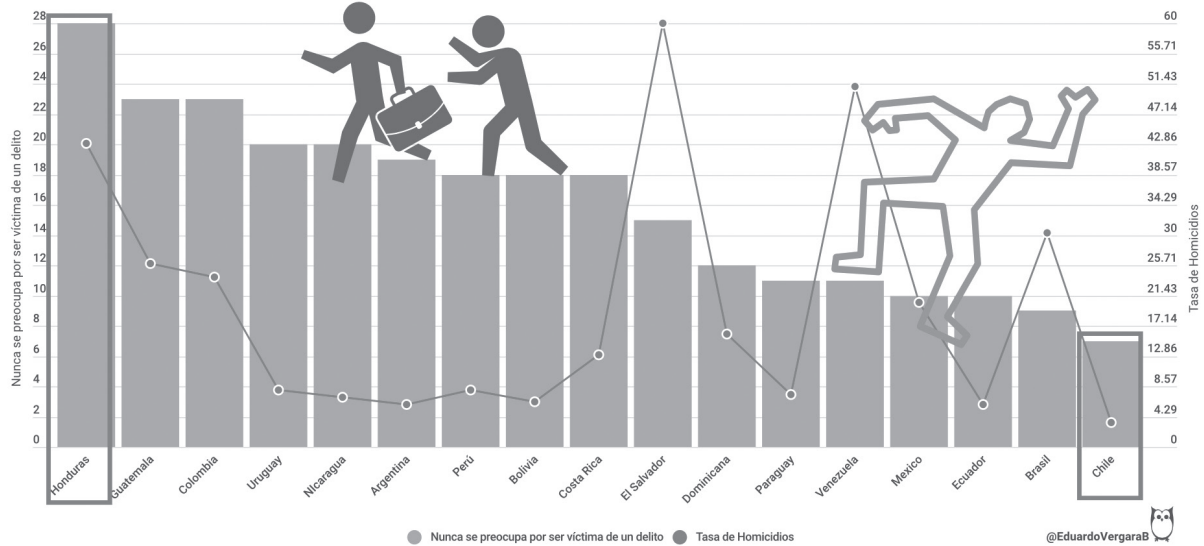
1. Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas. www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes.

2. Informe Latinobarómetro 2018. www.latinobarometro.org/lat.jsp.



Gráfico 2

RELACIÓN TASA DE HOMICIDIOS (IGARAPÉ, 2018) Y PERCEPCIÓN DE QUE NUNCA SERÁN VÍCTIMA DE UN DELITO (LATINOBARÓMETRO, 2018)



INTERNALIZAR GANANCIAS Y EXTERNALIZAR PÉRDIDAS: EL MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA GENERAR INGRESOS PRIVADOS

Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos de Igarapé (2018) y Latinobarómetro (2018).

Hablar de seguridad es hablar de desigualdad

Inevitablemente, en estos escenarios de temor, renacen las respuestas ciegas basadas meramente en el control y el castigo. Tanto el control como la persecución se caracterizan por una fuerte obsesión por perseguir a los más vulnerables, donde para los promotores de estas políticas, también reside el delito. La focalización policial sobre zonas de menos recursos junto con la desproporción en las penas, han generado como resultado que en muchos países la cárcel se transforme en una extensión de la pobreza.

En particular, las políticas de drogas han profundizado esta situación cuando hablamos de las mujeres. El número de mujeres encarceladas ha aumentado en un 51.6% durante los últimos 15 años, y en casos como Colombia un 300% en los últimos 25 años. Principalmente, el uso desmedido de la prisión preventiva ha causado el endurecimiento de políticas criminales. Esto último ha sido resaltado por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su informe sobre Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América.³

En Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica, sobre el 60 por ciento de la población carcelaria femenina está encarcelada por delitos relacionados con drogas.⁴ Y en casos como el chileno, en regiones como Arica, zona fronteriza con Perú y Bolivia, este porcentaje supera el 80%.⁵ Si solo hacemos el ejercicio de aglutinar las causas que llevan a las mujeres a la privación de libertad en Chile, vemos que los delitos cometidos para generar ingresos (drogas, delitos contra la propiedad, hurtos, etc.) explican el 83% de los ingresos.

3. Medidas Dirigidas a Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en América [http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Pretrial Detention.pdf](http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Pretrial%20Detention.pdf).

4. Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en las Américas. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2016/06/Guide-WomenDrugIncarceration-Spanish_WEB.pdf.

5. Laboratorio de Seguridad. www.labseguridad.org.



Pero la desigualdad no es solo de género, sino que ésta se ve también reflejada cuando hablamos de ingresos o estratos socioeconómicos. Desde las formas en que se expresan los fenómenos de violencia asociados al narcotráfico y el crimen organizado, hasta las balacearas en los barrios y el crecimiento de zonas de mayor inseguridad, vemos que por toda Latinoamérica las desigualdades se ven expresadas de mayor manera en los territorios donde viven los que menos tienen.

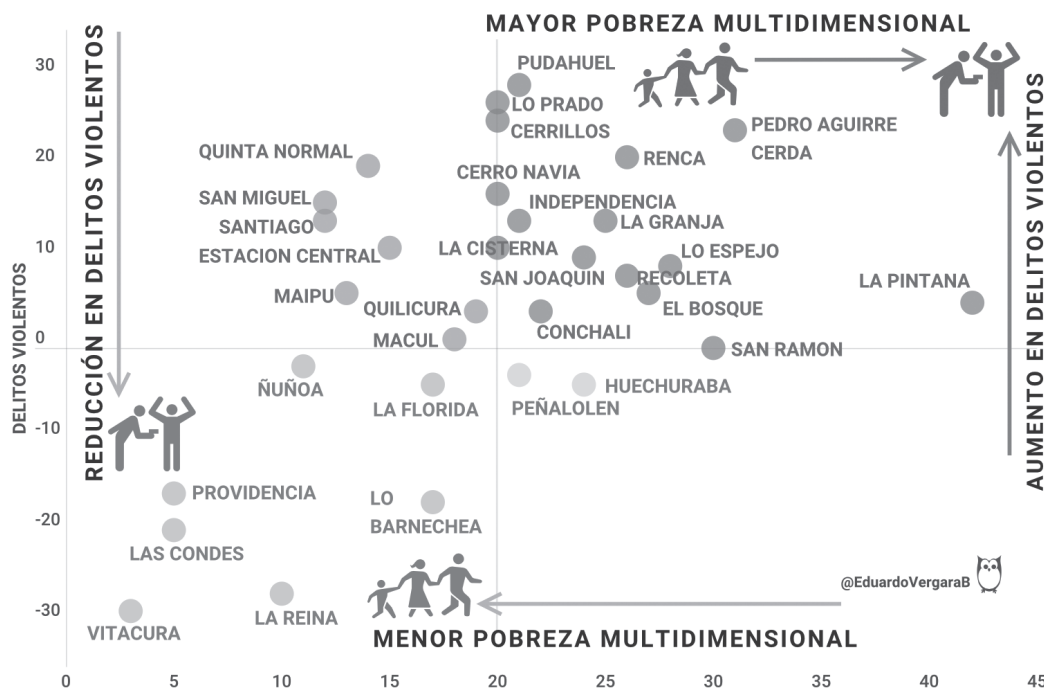
Es más, prácticamente todas las capitales de la región, independiente de los niveles de delincuencia o incluso homicidios, cuentan con zonas y barrios donde sus habitantes pueden vivir con tales niveles de seguridad que estos se asemejan a los de los países más seguros del planeta. Los grados de desigualdad en seguridad son dramáticamente evidentes en todos nuestros países. Lo que sucede, es que mantener a ciertos sectores de la sociedad seguros, muchas veces pasa por barrer la inseguridad hacia los sectores donde viven los que menos tienen.

Por ejemplo, mientras los delitos violentos mostraron una baja del 1% en la Región Metropolitana de Santiago en Chile (donde se concentra cerca de la mitad de la población del país), la disparidad que se observa entre comunas es profunda. Mientras comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea (donde se concentra la población de mayores ingresos en el país) bajaron estos delitos en un promedio del 26%, en comunas como Pudahuel, Lo Prado y Cerrillos (donde se concentra la clase media y los sectores más vulnerables) éstos subieron en un 29% durante el 2018. En Chile las alzas y bajas en delitos se explican en gran parte por factores como los niveles de pobreza multidimensional.⁶ En general, a mayor pobreza multidimensional, estamos observando que toman lugar los mayores aumentos en la actividad delictual violenta (ver gráfico 3).

6. Seguridad ¿para quiénes? www.labseguridad.org.

Gráfico 3

Relación pobreza multidimensional y delitos violentos en la región metropolitana (Chile).



Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos de Carabineros de Chile (2018) y categorización de Pobreza Multidimensional del Ministerio de Desarrollo Social en base a encuesta nacional CASEN.



Si miramos con mayor profundidad los fenómenos asociados a esta desigualdad, vemos que la respuesta privada de la seguridad juega un rol fundamental. La privatización de la seguridad ha resultado en que vivir seguros para muchos depende de su capacidad de pago. Tal vez los ejemplos más evidentes los vemos en países centroamericanos, donde el rol que juega la seguridad privada es determinante para los niveles de seguridad. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras el crimen cuesta el 3% del PIB regional, el 37% de esta fracción corresponde a gasto privado. En nuestra región, 2.4 millones de personas son empleados por un universo de 16 mil firmas del rubro de la seguridad privada. Solo en México entre el 2002 y el 2016 el valor de la industria formal de empresas de seguridad creció en un 180%, llegando a los 1.500 millones de dólares.

Durante el 2017 se registraron cerca de cuatro mil empresas dedicadas a esta labor. Mientras tanto en Guatemala se estima que el personal de seguridad privada puede llegar a las 200.000 personas y en Honduras, la industria pasó de 116 empresas en el 2016 a 1038 en el 2017.⁷ La inseguridad es un gran negocio que sigue creciendo.

La seguridad para las cosas sobre la seguridad para las personas: internalizar ganancias y externalizar pérdidas

Si continuamos teniendo en consideración el rol del sector privado en la seguridad, éste no solo se caracteriza por generar oferta de seguridad como un servicio, sino que también es un gran responsable de la demanda por seguridad pública. En muchos países, las empresas cuentan con mayor protección que las personas. Existen lógicas de concentración de seguridad que no están enfocadas en las personas, pero sí para proteger las cosas. Ya por años en nuestra región, el sector privado ha gozado de una gran protección por parte de la seguridad pública, recibiendo un subsidio mientras invierte bastante poco en seguridad privada.

Particularmente en lo que respecta a grandes eventos masivos o grandes espacios comerciales, el

modelo de internalización de ganancias y externalización de pérdidas define la relación del Estado con muchos privados cuando se trata de seguridad. Esto es, en otras palabras, la consolidación de un sistema donde se reducen los incentivos para que los privados inviertan en seguridad proporcionalmente a su demanda. En suma, la entrega de seguridad por parte del Estado se transforma en un subsidio para la generación de ganancias y productividad a costa de quienes más necesitan seguridad (gráfico 4).

Cuando hablamos de esta relación, uno de los mejores ejemplos a nivel regional se puede encontrar en los eventos deportivos de fútbol profesional. Mientras las recaudaciones de los clubes en algunos casos superan el millón de dólares, solo producto de las entradas por encuentro, los organizadores privados dependen de las policías para el resguardo general de la seguridad. Esto les permite evitar gastos sustantivos en seguridad y recibir una forma de subsidio a sus actividades privadas.

Es más, ya que en general los cuerpos policiales cuentan con recursos limitados, lo que termina sucediendo es que las policías son sacadas de la calle y los barrios para destinarlas a resguardar el orden en estos eventos. No cabe duda que esta consideración merece además una reflexión sobre los límites y responsabilidades del espacio público, el privado y el privado con usos públicos, abriendo entonces el debate sobre el rol del Estado y la protección. Si bien no podemos olvidar la responsabilidad que el Estado tiene en proteger e incluso, e rol que éste debe cumplir en dar las garantías mínimas para que actividades productivas puedan funcionar con estándares básicos de seguridad, no parece desmesurado reflexionar sobre los grados del uso del recurso público de seguridad en el espacio privado, particularmente al existir lucro de por medio.

Lo que está en juego al observar el paradigma de la seguridad pública en espacios o actividades privadas, tiene que ver con el rol de la labor policial y el uso de recursos públicos. Esta reflexión es pertinente

7. Seguridad a la venta. www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/03/Security-for-Sale-FINAL-SPANISH.pdf.



Gráfico 4

**Internalizar ganancias y externalizar pérdidas:
el modelo de seguridad pública para generar ingresos privados**



Fuente: Gráfico de elaboración propia.

y central, ya que nos ayuda a entender el por qué necesitamos velar por que el uso del recurso policial tome lugar donde genere mayor retorno social y no solo económico para unos pocos.

Este modelo de internalización de ganancias y externalización de pérdidas que se encuentra instalado en gran parte de nuestros países nos obliga redefinir o al menos actualizar una de las finalidades de las acciones de seguridad pública y por sobre todo la forma en que medimos la seguridad, hasta hoy, en gran parte concentrada sobre delitos contra la propiedad.

Estas finalidades, por definición, deben apuntar a lo público, lo que se sustenta en la persona y no en las cosas. En el mismo plano, es necesario sacar a la luz que quienes organizan eventos masivos o son responsables de actividades económicas en

espacios de amplia concentración comercial (ya sea ventas, transporte, servicios, etc.) generan riesgos y en consecuencia deberían hacerse cargo de forma proporcional a la demanda de seguridad pública que generan. En otras palabras, deben existir modelos que obliguen a que absorban las externalidades negativas de sus actividades.

Cabe destacar que la relación entre lo privado y lo público es también en casos virtuosa. La correcta inversión y despliegue por parte de los privados puede generar un aporte a la seguridad de lo público. Es más, el correcto uso de tecnologías y un buen trabajo en seguridad privada puede llegar a liberar valiosos recursos públicos que pueden ser usados donde generan mayor retorno social. Con todo, e independiente de la contribución que desde lo privado se pueda hacer a la seguridad pública, no



podemos olvidar que el incentivo final de la inversión en seguridad por parte de los privados es la de proteger el bien privado y facilitar el consumo.

Cuando las explicaciones se transforman en excusas

No cabe la menor duda que las causas del delito tienen que ver con múltiples factores y que, en consecuencia, la respuesta requiere de enfoques integrales. Estos factores son particularmente sociales y tienen que ver con las brechas en educación, el empleo de mala calidad o mal remunerado y la desigualdad con todas sus aristas.

Sin embargo, esta constatación se ha transformado en una limitante. Ha contraído el rol de la centroizquierda en los debates de seguridad, ya que ha generado que la meta de una sociedad segura pareciera que solo se pueda lograr una vez que la sociedad misma sea reformada. Esto significa que sufra los cambios necesarios para que las sociedades sean más justas, equitativas y donde se garantice no solo el acceso, sino la calidad a derechos como la educación, la salud y el trabajo.

Si bien mayoritariamente el sector progresista está de acuerdo en que los factores que explican el crimen son de corte social, la imposibilidad de lograr los mínimos ideales, se ha transformado también en una excusa para no asumir pensamiento y acciones enfocadas en la seguridad. En suma, la profundidad del problema termina por generar un estado de parálisis.

Dada esta realidad asumida, que se transforma en una limitante, una vez que los sectores progresistas llegan al poder, deciden delegar la seguridad a las fuerzas policiales y de orden público. Si bien generalmente se clarifican los grandes lineamientos que en muchos casos vienen de las propuestas programáticas de las mismas campañas que les llevan al poder, cuando llega el momento de gobernar, se delega, generando un desgobierno. Es aquí donde toma lugar una delegación de poder bajo la esperanza de que las fuerzas de orden público lo hagan bien y sin generar grandes problemas que puedan afectar ni la gobernabilidad ni sus niveles de aprobación.

Al final del día, el acuerdo implícito consta de una delegación de poder mientras se pueda mantener el status quo y evitar grandes problemas. Es bajo esta interrogante que urge retomar la reflexión sobre los verdaderos grados de control civil que tienen los gobiernos sobre sus policías, los mecanismos de rendición de cuentas y en general la llamada democratización de las policías. Con todo, en muchos casos se usa la excusa de que se necesita mayor control civil sobre las policías como una forma de justificar el mal o inexistente uso del poder que ya se tiene. Al final del día, esto se termina explicando gracias a un grado de ineficiencia e incompetencia política limitada por la falta de valentía.

Cabe destacar que esta forma de enfrentar la seguridad, constantemente invocando sus causas, ha llevado a la creación de falsos supuestos respecto a la relación entre inseguridad y pobreza. Incluso, es tanto el énfasis que el progresismo le da a las causas, como la pobreza, que termina instalando la existencia de relaciones perjudiciales.

Esta relación no se trata solo de un estigma, sino que cuando la pobreza se transforma en causal de inseguridad para la población, rápidamente las agendas enfocadas en reducir la pobreza dejan de ser agendas sociales como imperativos de gobierno, y pasan a ser atajos para sociedades más seguras. De esta forma, la pobreza es arrinconada aún más. Esta es, nuevamente una consecuencia impensada que termina por robustecer el discurso y la acción política de los sectores más conservadores.

El manejo del miedo y los medios de comunicación

Otra constatación relevante al momento de analizar los escenarios ligados al rol del progresismo en los debates de seguridad tiene que ver con la instalación del miedo. Si bien existen liderazgos que usan el miedo como medio para gobernar y constantemente lo incluyen en sus discursos, el miedo suele abrirse paso de forma más rápida gracias a los medios de comunicación, pero particularmente de aplicaciones (apps) sociales, plataformas de comunicación masiva y rápidas como *Whatsapp*, o portales de noticias falsas que sirven para nutrir todo tipo



de canales de comunicación. Es en estos ambientes, que retóricas como la “guerra contra las drogas” o el “combate contra la delincuencia”, resultan ser altamente eficientes y convenientes.

Lo segundo es el rol de los medios. Este es lo más complejo, ya que tiene que ver con la construcción de las noticias y el uso de esto por parte de quienes controlan estos mismos medios de comunicación. Desde México hasta Argentina abundan los medios de comunicación que hacen del sensacionalismo mediático su labor diaria. Tanto contenidos gráficos, visuales como escritos construyen de manera permanente una realidad de inseguridad y temor. Esto genera una mediatización de la violencia, no solo por medio de la “crónica roja”, sino por el mal uso de las imágenes de apoyo (imágenes de archivo) que no corresponden a la noticia que se titula o el mal uso de categorías “en vivo” cuando se trata de imágenes que no corresponden al momento. La manipulación de los medios y la comunicación se encuentra al centro de este desafío.

Si bien la mediatización de la inseguridad no es la única causal de la sensación de inseguridad que vemos en gran parte de nuestra región, sí tiene grados importantes de responsabilidad. La mediatización genera incluso una naturalización de la inseguridad y la violencia que nutre los populismos.

Ambos factores terminan por construir sensaciones que logran subyugar a gran parte de la población bajo el temor. Ya lo vimos previamente cuando hablamos de la sensación de inseguridad versus los índices de seguridad medidos. Una población que teme se transforma en una población vulnerable. Una sociedad sometida al miedo celebra todo tipo de medidas efectistas y de mano dura, principalmente, ya que busca inmediatez y tolerancia cero. Esta constatación es especialmente delicada porque habla de verdaderos caldos de cultivo para el populismo ya mencionado.

Como hemos visto, en nuestra región toma lugar una serie de problemas, realidades y desafíos en torno a la seguridad y la forma en que la enfrentamos o hemos decidido evadir. Lo que observamos es la necesidad de repensar y definir el rol

del progresismo en la construcción de sociedades más seguras, sin dejar de lado la preocupación por la equidad, el respeto a los derechos humanos y el progreso con igualdad. Por, sobre todo, urge pensar la seguridad como un bien público fundamental para la democracia y el bienestar general de los pueblos. Definir principios, ideas, aprender de las buenas prácticas y ofrecer propuestas, se transforman en necesidades que de forma inmediata deben ser abordadas. En gran parte avanzar, depende, últimamente, de decisiones políticas.

Principios para una política progresista de seguridad que nos ayuden a pasar a la acción

Sugerimos considerar, al menos, cuatro principios básicos el momento de pensar o construir una política progresista de seguridad. Estos principios, que pueden llegar a ser rectores, reconocen a la seguridad como un derecho, un bien público, como garante de los niveles de bienestar y convivencia, a los que debe tener acceso toda persona y que debe considerar en todo momento modelos de desarrollo alternativo.

Gráfico 5

Principios para una política progresista de seguridad que nos ayuden a pasar a la acción



Fuente: Gráfico de elaboración propia



El derecho a vivir seguros

Un punto de partida que debe abrazar el progresismo, es consensuar de que vivir seguros y libres de amenazas es un derecho humano fundamental e irrenunciable. Este no puede depender de los recursos económicos de cada persona y menos de un Estado policial que invada todas las esferas de la vida. Entonces, como punto de partida, hablamos del resguardo de un derecho irrenunciable, no de un privilegio, que no puede ser logrado a costa de la pérdida de libertades y derechos.

Por esta razón, una política de seguridad progresista en una sociedad abierta, tolerante, libre e igualitaria, debe partir por poner la persona al centro. Esto implica revalorar la seguridad como otra cara del derecho a la libertad de las personas ante amenazas, más que como la canonización absoluta del derecho a la propiedad privada. Implica terminar con la identificación de la seguridad con los delitos de pobres a ricos, que han transformado a la cárcel en una extensión de la pobreza, y tener una mirada más amplia del delito incluyendo los de “cuello y corbata” y por sobre todo los cabecillas de las estructuras criminales.

La seguridad como corresponsabilidad y un bien público

La seguridad no puede ser vista como un servicio público (menos uno privado), sino que como un bien público. Esto último implica que ésta no puede depender de los recursos de la persona, ya que debe ser garantizada por igual para todos. Por lo demás, bajo esta lógica se entiende que, si bien existe la responsabilidad por parte del Estado de proteger, ésta no puede depender exclusivamente de éste. La seguridad es un bien común social sobre el cual todos tienen derechos, pero además deberes.

Los deberes apuntan a la responsabilidad y a la necesaria participación que tanto actores públicos como privados tienen en ella, las comunidades y la ciudadanía en particular. Es por esto que una política progresista de seguridad debe contemplar a la co-producción, la co-construcción y la co-responsabilidad como acuerdos claves para una seguridad comunitaria. Incluso, y superando la participación

de diversos actores tanto en derechos como deberes, la participación de la más amplia diversidad de actores se transforma en un requisito para lograr comunidades más seguras. Es imposible que solo el Estado democrático se haga responsable de esta tarea.

La seguridad como garante del bienestar y la convivencia

Una política progresista de seguridad debe centrarse en la comunidad por medio del fortalecimiento de la convivencia y el bienestar. Cuando analizamos las causas de la inseguridad, vemos que en un gran número de países las personas declaran sentirse tanto o más inseguras bajo condiciones de abandono urbano que incluso haber sido víctima de un hurto menor.

Es más, el avance de las migraciones y la diversidad que eso ha traído a diversas ciudades y países, ha generado nuevos espacios de fricción que simplemente tienen que ver con formas y estilos de vida. Resolver estos conflictos e incluso los grados de inseguridad que se generan, muchas veces pasa por mecanismos blandos de diálogo y resolución de conflictos menores como justicia vecinal. Mirar hacia nuestras comunidades además obliga a tener como foco la recomposición del tejido social en ambientes cada vez más complejos.

Desarrollo alternativo

Gran parte de los delitos que llevan a la cárcel están relacionados a la generación de ingresos. Este es el grueso de los delitos contra la propiedad privada. En lo que respecta a generación de ingresos, también se incluyen los delitos por infracciones a las leyes de drogas que explican de manera transversal las razones de la privación de libertad en Latinoamérica.

Un enfoque progresista debe entregar alternativas. Estas pasan por modelos de desarrollo alternativo desde la base, ya sea de forma preventiva con alternativas laborales y productivas o como de reinserción o inserción. Todas con el objetivo de volver a entregar la posibilidad de participación en actividades lícitas. El Estado es aquí quien puede jugar un rol central en robustecer esta oferta con



Gráfico 6

Pilares estructurales de una política de seguridad progresista



@EduardoVergaraB

Fuente: Gráfico de elaboración propia

incluso consecuencias como reducciones en el gasto de control y persecución.

Pilares estructurales de una política de seguridad progresista para los tiempos actuales

Teniendo en cuenta los principios que podrían sustentar una política de seguridad progresista, es posible avanzar en la definición de pilares estructurales básicos que permitan pensar y elaborar propuestas de política pública. Estos pilares pueden, también, transformarse en un mínimo común al momento de pensar o diseñar una política. Estos son: Prevención, control y reacción, rehabilitación, reinsertión o inserción.

Debemos contar con una mirada integral al fenómeno del delito y la seguridad que siempre parta por la 1) prevención, eliminando de raíz o reduciendo aquellas circunstancias que favorecen la comisión de éstos. La prevención puede ser, por ejemplo, sobre problemáticas sociales como sobre desafíos situacionales. Por lo demás, prevenir es menos costoso que perseguir. Toda medida preventiva cobra máxima pertinencia.

Un ejemplo de prevención tiene que ver con reducir la deserción escolar. Programas psicosociales de

alerta temprana de ausentismo y de segunda oportunidad de re-escolarización, son simultáneamente política social y de prevención del delito.

De igual manera, entender el consumo problemático de drogas como un problema de salud pública obliga a generar una oferta de tratamiento y políticas de salud mental hoy inexistentes en muchos países. Como mencionamos, otros ejemplos tienen que ver con lo situacional. No hay buen urbanismo si no aporta a la seguridad ambiental. Una política de espacios públicos seguros supone, por ejemplo, iluminación urbana de calidad, recuperación de sitios eriazos, eliminación de micro basureros, cierres/muros perimetrales transparentes, uso eficiente de la tecnología, conectividad, etc.

A lo anterior, debemos agregar una política policial acorde con la magnitud y complejidad de la tarea, recuperando el rol profesional y preventivo de las policías, acompañado de control inteligente y proporcional. El rol en el 2) control y reacción debe ser ejecutado sin complejos. La vigilancia estratégica y la cercanía con la comunidad, además de los mecanismos de control, son claves para recuperar la confianza.

Esto supone establecer un modelo comunitario, pasando de un enfoque centrado en el control y



represión hacia uno centrado en la seguridad del barrio, la calidad de vida y la solución de problemas. Pasar de trabajar con la comunidad a estar asociada con ésta, de ser un cuerpo reactivo a uno proactivo. Con todo, urge mejorar el uso de nuevas tecnologías de información, *big data* y la capacidad analítica para focalizar su accionar y multiplicar los recursos disponibles para la calle, todo con pleno respeto a los derechos de las personas.

Por lo mismo, se hace imprescindible avanzar hacia sistemas de justicia proporcionales y que terminen la sensación de impunidad que se instala en la población cuando ven que criminales quedan libres tras cometer delitos tan impactantes como los homicidios, torturas o violaciones. Sin caer en el populismo penal o la profundización del castigo desproporcionado sobre los que menos tienen, una política de seguridad debe garantizar pisos mínimos para que se cumpla y respete el Estado de Derecho.

Hay que repensar nuestros sistemas penales, carcelarios y de 3) rehabilitación. El éxito de una política de seguridad no puede ser medida por el número de personas que terminan en la cárcel. Es más, el volumen de encarcelamiento y particularmente el hacinamiento deben ser vistos como signos de un fracaso en las políticas de seguridad. Durante décadas se ha instalado el mito de que la peor puerta giratoria es la del detenido que no termina en la cárcel.

Sin embargo, las tasas de encarcelación en Latinoamérica tienen a nuestras cárceles sobre pobladas, sea por delitos graves y otros no tanto. Eso no quiere decir que no podamos mejorar la eficacia de nuestro sistema y, por cierto, la penalización adecuada de cada delito. La puerta giratoria que más debiera preocuparnos es la reincidencia. De no parar la carrera delictiva, especialmente de quienes parten a temprana edad, nuestros sistemas no darán abasto. Todo lo que hagamos por reinserir a un preso en la sociedad, con un oficio digno y bien remunerado, será una inmensa ganancia social.

Por último, las políticas de 4) reinserción o inserción deben estar enfocadas desde lo preventivo a lo reactivo. Las tasas de reincidencia, si bien varían de

país en país, suelen explicar en gran parte los volúmenes de participación delictual. El caso de desarrollo alternativo en cuanto a sustitución de cultivos es un ejemplo que debe ser analizado. Además, existen elementos de éxito que incluso se pueden replicar en estrategias para reducir la participación de personas vulnerables y menores en actividades de microtráfico. Mientras el grueso del universo de personas privadas de libertad se explique por delitos ligados a la generación de ingresos, queda claro que hay mucho por hacer sobre las causales previas al delito. Es solo ahí que podemos comenzar a discutir las estrategias de reinserción que deben ofrecer alternativas viables que abran la puerta a alternativas de vida en una sociedad que los integre plenamente.

Conceptos, ideas y acciones para avanzar en una agenda progresista de seguridad

Teniendo en cuenta los debates actuales y los desafíos presentes, se torna relevante abordar conceptos, ideas y por sobre todo proponer acciones concretas que permitan profundizar las agendas progresistas en seguridad. Esto, en muchos casos no solo implica la política pública, sino que también la elaboración de propuestas políticas que sean electoralmente exitosas, pero por sobre todo aplicables y beneficiosas en la práctica. Frente al avance de liderazgos populistas que hacen de la inseguridad una constante, urge presentar y desarrollar argumentos razonables, sensatos y aplicables. En el gráfico 7 se presentan algunas ideas.


El desafío no es solo técnico, sino que por sobre todo político


Las bases técnicas, comparadas y visiones modernas sobre la seguridad existen en el mundo progresista. Es más, una serie de actores regionales y mundiales como la misma Fundación Friedrich Ebert, universidades y ONGs han liderado por años debates y producción de conocimiento. Hay mucho material. Sin embargo, el desafío sigue siendo mayoritariamente político. Esto implica, abordar el problema entendiendo que los incentivos electorales y de la opinión pública están justamente puestos en lo opuesto y que, volver a poner la seguridad en





Gráfico 7


Conceptos, ideas y acciones para avanzar en una agenda progresista en seguridad


- 


1.- El desafío no es solo técnico, sino que por sobre todo político
- 


2.- El Estado tiene la responsabilidad de proteger, pero no lo puede hacer solo
- 


3.- **Transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en diseño, ejecución y control**
- 


4.- El uso de la fuerza: Sin miedo, pero proporcional e inteligente
- 


5.- Impunidad, justicia y castigo proporcional
- 


6.- Recursos policiales donde generen mayor retorno social
- 

7.- Nueva forma de medir la seguridad: personas sobre las cosas
- 

8.- Enfoques: Género e infancia
- 

9.- Los más vulnerables son también víctimas
- 

10.- El sistema de seguridad debe ser conducido por civiles y no puede ser militarizado
- 

11.- Definir y nombrar con claridad al enemigo
- 

12.- Comunicar seguridad, no inseguridad

@EduardoVergaraB 

Fuente: Gráfico de elaboración propia

nuestra agenda política no es un desafío que se pueda concretar en el corto plazo.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger, pero no lo puede hacer solo

Esta es una constatación y realidad que se debe instalar. Es simple. Estando en oposición o gobierno, el progresismo debe entender y comunicar, que la inseguridad no se puede enfrentar solo desde el gobierno. Este punto de partida ayuda, además, en la necesaria inclusión de actores privados, sociales y ciudadanos en la búsqueda de soluciones. Una de las debilidades que ha mostrado el progresismo en nuestra región, es la incapacidad de articular al capital e incluir al sector privado en la búsqueda de soluciones. Además, esta inclusión, pragmática y necesaria, ayuda a definir responsabilidades tanto en victorias como fracasos.

Transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en diseño, ejecución y control

De la mano con la inclusión de actores públicos, privados y ciudadanos, es necesario relevar la transparencia y la participación como procesos y mínimos permanentes. Por un lado, la transparencia permite que actores que no cuentan con el monopolio de los datos (como son los gobiernos en gran parte de la región) tengan acceso a información y no solo puedan fiscalizar y hacer seguimiento, sino que también colaborar desde afuera.

Mayores grados de transparencia son particularmente necesarios cuando abordamos desafíos como el rol policial y el uso de recursos. Además, nos permiten repensar los sistemas de evaluación. En paralelo, se encuentra la necesidad y obligatoriedad de generar



mayor participación ciudadana tanto en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas.

El uso de la fuerza: Sin miedo, pero proporcional e inteligente

Se ha instalado una suerte de tabú cuando se trata de usar la fuerza. Los gobiernos progresistas incluso optan por delegar la seguridad a las policías, generando un desgobierno creciente. El progresismo debe entender que el uso de la fuerza y la represión son necesarias en situaciones particulares. Estas deben ser usadas de manera proporcional e inteligente, pero sin miedo. La mano blanda generalizada, es casi tan perjudicial como la mano dura desproporcionada.

Esto además obliga a revisar el uso de las tecnologías, especialmente cuando el incentivo hacia la ciudadanía está puesto en mostrar despliegue. Todo con pleno respeto a los derechos de las personas. No podemos continuar dejando de lado discusiones sobre privacidad, derechos y libertad. Avanzar en estos aspectos pasa por derribar miedos, mitos y tabúes.

Impunidad, justicia y castigo proporcional

Uno de los problemas centrales que se ha instalado sobre los sistemas de justicia tiene que ver con la impunidad. Esta se grafica de mayor manera en el impacto que genera sobre la población ser testigos de las llamadas puertas giratorias, la imagen de delincuentes, particularmente autores de crímenes de mayor relevancia contra las personas, que tras ser detenidos salen rápidamente en libertad. Lo que queda en cuestión en estos casos es la fragilidad del Estado de Derecho, la sensación de que se pueden cometer los delitos como homicidios o acciones de violencia sin consecuencias penales. Por un lado, este problema pasa por sistemas extremadamente garantistas que impiden una persecución penal adecuada; mientras, por otro lado, por las precarias capacidades de investigación. Para lo primero se requiere de una revisión a la proporcionalidad de las penas, que logren garantizar que crímenes de alto calibre, no queden impunes. Mientras que lo segundo, por una modernización de las capacidades

investigativas y de levantamiento de pruebas por parte de los actores del sistema. Cuando los ciudadanos sienten que existe impunidad se inician cuestionamientos profundos en la confianza de las instituciones. Es más, incluso en ciertos casos, aplican como incentivo para que quienes tomar parte de la actividad criminal sientan que no existirán consecuencias penales.

Sin embargo, abordar esta problemática nos lleva inevitablemente, al debate sobre proporcionalidad. Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, en gran parte de la región, la cárcel se ha transformado en una extensión de la pobreza. Quienes tiene más recursos logran evadir el castigo, y quienes menos tienen, quedan sin opciones y defensa alguna. No se trata entonces de endurecer el castigo, sino que de hacer que este sea proporcional. La justicia debe actuar de igual manera independiente de los recursos de la víctima o el victimario. Esta constatación abre, inevitablemente, el debate sobre el populismo penal que ha llevado a que muchos actores, particularmente con incentivos político-electorales, prometan y apliquen mano dura indiscriminada y transformen a la promesa de más cárcel en un pilar de su retórica del orden y el castigo.

Recursos policiales donde generen mayor retorno social

La desproporción en el uso de recursos policiales en beneficio de ciertos actores o sectores sociales es preocupante. Pero de mayor manera cuando vemos que muchas policías terminan estando al servicio de la protección de cosas por sobre la protección de las personas o incluso al servicio de actividades privadas que generan grandes ingresos en vez de proteger el espacio público en los barrios.

Como principio, tanto en el diseño de estrategias policiales como en el despliegue policial mismo, requieren de un enfoque progresista que garantice que las policías estén, con sus mejores recursos y personal, donde generen mayor retorno social. Esto obliga, en muchos casos a un rediseño de la presencia y accionar de nuestras policías en base a nuevos parámetros de medición del éxito.



Nueva forma de medir la seguridad

La forma en que medimos la seguridad genera las condiciones para el despliegue policial y las acciones lideradas por los gobiernos. En gran parte de los países de la región, la forma de medir delitos es por medio de las categorías de “mayor connotación social”, “mayor relevancia” o de “mayor impacto”. Sin embargo, estas categorías están principalmente construidas en base a delitos contra la propiedad, que, en muchos casos, son delitos de los que menos tienen hacia los que más tienen.

No obstante, el esfuerzo debe estar en dar un especial protagonismo a delitos que afectan a las personas, a los sectores más vulnerables y, por ejemplo, a las mujeres. Ya algunos países han incluido en estas categorías a la violencia intrafamiliar. Sin embargo, mucho queda por repensar y actualizar la forma en que medimos los éxitos y fracasos cuando hablamos de seguridad. Esto para que, las políticas y acciones de seguridad vuelvan a estar enfocadas en el beneficio de las personas.

Enfoques: Género e infancia

No se puede perder el foco. No solo las políticas de seguridad y castigo afectan de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y niños, sino que además las características del crimen les afectan de especial manera. En el caso de las mujeres, vemos que la composición de las prisiones preventivas y la cárcel en particular son fiel reflejo de esta inequidad. Por otro lado, en el caso de los niños, ya que pasan más tiempo en el espacio público, vemos cómo están constantemente expuestos a grados de inseguridad desproporcionados.

Cuando hablamos de control y castigo, estos también han sido víctimas de olas de acciones populistas que buscan perseguirlos, criminalizarlos y castigarlos. Claro está que en muchos países la participación de menores en delitos violentos va en aumento, pero por esto mismo debemos mostrar capacidad de centrar propuestas en lo preventivo más que en lo punitivo. Por ejemplo, una política de seguridad hacia menores, debe dar el peso adecuado a sacar niños de la calle para que vuelvan a la escuela, en vez de perseguirlos para recluirllos.

Los más vulnerables son también víctimas

No podemos olvidar ni dejar de recordar que los eslabones más débiles del crimen son víctimas. Las políticas de seguridad del control, suelen enfocarse en los eslabones débiles para perseguirlos y encarcelarlos. Sin embargo, a pesar del enfoque sobre las causas que muchas veces estanca el debate, poco o nada existen esfuerzos por relevar la condición de estas personas.

Cuando miramos la proporción de delitos que se cometen para generar ingresos, las características de la población protagonista junto con sus condiciones de vida, laborales, educacionales, sociales y de salud, vemos características compartidas. Esta población sufre y vive con dificultad, porque los modelos de gobierno no han sido capaces de garantizarles estándares mínimos de (sobre) vida. No podemos dejar de lado estas constataciones. El sistema mismo de castigo hace crecer la mano de obra disponible para el crimen organizado, generando un número creciente de eslabones desechables. Estos eslabones son personas, víctimas, gracias al fracaso de nuestros sistemas.

El sistema de seguridad debe ser conducido por civiles y no puede ser militarizado

Más allá de las todavía necesarias reformas policiales (que es una de las problemáticas donde sí se ha generado bastante conocimiento y propuestas) es relevante reforzar las posturas respecto al rol civil de las policías y el rol de quienes las conducen.

La militarización de la seguridad ocurre tanto de forma directa por medio del ingreso de militares a labores de seguridad ciudadana, como militarizando los liderazgos y las prácticas de las policías. Ejemplos de militarización directa o indirecta sobran en México, Argentina e incluso en Chile. La conducción civil de la seguridad junto con la desmilitarización de la actividad policial, resultan ser desafíos centrales.



Definir y nombrar con claridad al enemigo

De la misma manera como el progresismo olvida y deja de recordar que en la delincuencia la mayoría de sus protagonistas son también víctimas, poco o nada logra en definir y nombrar los verdaderos “enemigos”. Estos son, quienes usan y abusan de los eslabones más débiles. Hablamos de las cabezas en las pirámides organizacionales, los capos de la droga, los grandes narcos y jefes de organizaciones criminales.

Por ejemplo, en problemas tan recurrentes como el comercio ambulante o callejero y los esfuerzos de gobiernos locales o nacionales por abordarlo, terminan en represión sobre los vendedores, personas que buscan una forma de trabajar, los eslabones más débiles de la cadena. Sin embargo, no se logra poner foco en los grandes líderes, que muchas veces además tiene participación en otras redes criminales que se mantienen interconectadas para explotar gente y mantenerse impunes. Este modelo se repite en la mayoría de las redes del crimen organizado, drogas trata y otras actividades ilegales.

Comunicar seguridad, no inseguridad

Dado los mismos incentivos políticos de mostrar mano firme y dureza, las estrategias comunicacionales de los liderazgos progresistas terminan por comunicar más inseguridad que seguridad. Puestas en escena con policías con rostro cubierto de fondo, incautaciones de droga y armas, terminan generando mayores sensaciones de inseguridad.

Además, en lo discursivo lo hacemos mal. El uso de mensajes y palabras inadecuadas generan espacios de incomodidad obligada y alimentan una retórica generalizada de combates, batallas y guerras. Las estrategias comunicacionales merecen coherencia, pero por sobre todo deben estar pensadas en base a los principios de una estrategia progresista que otorgue mayor seguridad.

Por último, es necesario desarrollar capacidad para enfrentar las encuestas. En gran parte de la región vemos gobiernos que generan sus propuestas en base a la opinión pública. El problema radica en

que ésta suele estar de acuerdo con medidas tan lejanas a nuestro pensamiento como la pena de muerte. Ni la culpa ni la responsabilidad es de esta “opinión pública”, sino que principalmente de actores, como el progresismo, que no ha podido instalar y socializar alternativas a estas propuestas de mano dura que hacen sentido, no solo por reflejar firmeza, sino que en muchos casos porque no existen otras alternativas que han sido socializadas entre la población para que ésta determine por cuáles opta y apoya.

Una breve reflexión (política) final

El desafío es grande y principalmente político. Ya por mucho tiempo el progresismo ha estado ausente de las propuestas y soluciones para enfrentar el reto de la seguridad. Es más, en muchos casos, su ausencia y silencio, ha transformado al sector en un verdadero cómplice del crecimiento del populismo de la mano dura, del orden y el castigo.

Populismo que incluso, ha nutrido agendas de campaña que han decantado no solo en éxitos electorales, sino que en verdaderos tanques de oxígeno para muchos gobiernos. Es de esta forma que urge abordar los verdaderos desafíos del progresismo en seguridad ciudadana, abandonado una serie de tabúes, cálculos políticos y miedos que han impedido que, por ya demasiado tiempo, no se generaran propuestas electoralmente atractivas, pero por sobre todo realistas y aplicables en la práctica.

Para avanzar se requieren muchos debates de fondo, pero por sobre todo sincerar los miedos y riesgos electorales. No será posible avanzar sin dejar de lado la comodidad de mantener distancia. Pero por sobre todo se requiere de grados de valentía para empujar agendas que tal vez, frente a la opinión pública actual, no serán del todo populares. Es por esto último que el desafío depende de la perseverancia necesaria para recuperar un espacio que ya por mucho tiempo se le ha entregado en bandeja a los sectores ligados al pensamiento de derecha. No podemos permitir que estos debates terminen siendo sobre mano blanda versus la mano dura. Tampoco, que sigan siendo en cancha ajena y con reglas impuestas, donde las derrotas no son solo predecibles pero naturalizadas.



La seguridad es una problemática demasiado relevante para quienes viven en Latinoamérica. Debemos entender que hablar de seguridad en Latinoamérica, es hablar de desigualdad. Esto ocurre no solo en la región más violenta, sino que una de las más desiguales. Es tal vez relevante, entonces, iniciar esta conversación con un mea culpa sobre lo que hemos hecho mal y lo que hemos dejado de hacer. Proceso que nos ayude como impulso inicial para hacernos cargo de esta deuda y gran desafío y responsabilidad. La ciudadanía está atenta a nuestras respuestas.

Perspectivas
Cómplices del populismo de la mano dura:
Los verdaderos desafíos del progresismo en la
seguridad ciudadana

se terminó de imprimir en junio de 2019
en Contramarea Editorial, S. A. S. de C. V.,
Chilpancingo 148, int. 201, col. Roma Sur,
del. Cuauthémoc, C. P. 06760, Ciudad de México.
El tiraje consta de quinientos ejemplares.



Autor

Eduardo Vergara Bolbarán es Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21 y fundador del Laboratorio de Seguridad. Fue jefe nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Chile. Fundó Asuntos del Sur y el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana. Es cientista político de la University of Portland en EEUU, Master en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), cursó el MA en Política de California State University, Long Beach y posee estudios avanzados en política de drogas y narcotráfico de CEU Budapest y Oxford Analítica. Es miembro del Observatorio del Crimen Organizado y la Gobernanza Democrática en América Latina y El Caribe de la Fundación Friedrich Ebert.

Pie de imprenta

Fundación Friedrich Ebert en México
Yautepec 55 | Col. Condesa
06140 | México, DF | México

Responsable

Hans Mathieu | Representante en México
Teléfono +52 (55) 5553 5302
Fax +52 (55) 5254 1554
www.fes-mexico.org

Fundación Friedrich Ebert en México

La Fundación Friedrich Ebert (FES), fundada en 1925 en Alemania, es una institución privada de utilidad pública comprometida con las ideas de la Democracia Social. Lleva el nombre del primer presidente del Estado alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, y es portadora de su legado en cuanto a la configuración política de la libertad, la solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde la Fundación en el interior y exterior de Alemania con sus programas de formación política, de cooperación internacional y de promoción de estudios e investigación.

En México, la FES inició sus actividades en 1969 buscando contribuir al fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas mexicanas, apoyando a aquellos agentes comprometidos con el respeto a la democracia, la justicia social y el entendimiento internacional. Actualmente la Fundación Friedrich Ebert en México ofrece plataformas de diálogo, talleres de fortalecimiento de las capacidades públicas de actores progresistas, asesoría institucional, consultorías y análisis político y de políticas.